

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL
JUZGADO DEL TRABAJO III

ACTUACIONES N°: 1775/17



H103034132384

**JUICIO: PEREZ JUAN MARCELO c/ D`ANDREA ESTEBAN FERNANDO s/
COBRO DE PESOS. Expte. N° 1775/17.**

San Miguel de Tucumán, 22 de noviembre de 2022.

REFERENCIA: Para dictar sentencia definitiva en el expediente caratulado “Pérez, Juan Marcelo vs. D`Andrea, Esteban Fernando - s/Cobro de Pesos”, tramitado ante este Juzgado del Trabajo de la III Nom.

ANTECEDENTES

Se apersonó el letrado Leandro G. Saavedra en representación del actor Juan Marcelo López, DNI N° 26.454.172, mayor de edad, con domicilio en B° Lomas de Tafí, sector 8, Mzna 1, Lote 02, casa 17 de la localidad de Tafí Viejo (hojas 2/13, digitalizadas), conforme lo acreditó con poder *ad- litem* (poder especial gratuito para este juicio) que agregó a hoja 106.

En tal carácter promovió demanda en contra de Esteban Fernando D`Andrea, DNI n° 7.653.937, con domicilio en calle Pellegrini n° 863 de esta ciudad; por el cobro de la suma de \$901.296,57 (pesos novecientos un mil doscientos noventa y seis con 57/100) en concepto de indemnización por despido directo y multas de ley.

La parte accionante fundó la presente acción manifestando que ingresó a trabajar para el demandado desde el 01/03/2002. Denunció que la relación laboral no se registró sino hasta el 01/03/2007.

en jornadas de 8 horas diarias de lunes a sábado, cumpliendo horas extra por la distancia de los viajes que no le fueron abonados. Denunció que percibía una remuneración de \$1.200 mensuales.

Manifestó que el actor prestaba servicios de chofer de carga manejando los camiones del demandado, en donde retiraba las cargas desde el domicilio de calle Pellegrini n° 863 y hasta los distintos destinos programados.

Denunció que desde principios del mes de octubre del 2016, se le prescribió licencia por enfermedad inculpable, por un cuadro de apnea del sueño severo con hipersomnolencia diurna exagerada, padeciendo adormecimientos repentinos en cualquier lugar y momento, por lo que se vio impedido de prestar sus tareas por los peligros que ello implicaba. Agregó que el demandado conocía su enfermedad en tanto le hizo conocer la misma a través de los diversos certificados médicos que le presentó, aunque alegó que no le abonó los salarios de los meses de septiembre y octubre 2016.

Destacó que el demandado procedió al despido directo del trabajador a partir de los reclamos de este por la falta de pago de sus haberes, negándose a recibir los certificados médicos de licencia que intentó entregarle. Agregó que tampoco aceptó una revisión por un médico de la empresa, habiéndose puesto a su disposición.

Denunció que el accionante se encontraba con licencia por enfermedad, presentando certificados médicos de fecha 03/10, 10/10, 17/10 y 26/10 del año 2016 y que el demandado se negó a recibir los dos últimos para luego intimarlo por abandono de tareas.

Relató que el 26/10/2016 el accionado remitió CD (carta documento) intimando a que se reintegre a su puesto de trabajo, bajo apercibimiento de considerarlo incurso en abandono de trabajo y proceder a su despido. Alegó que respondió la misiva mediante TCL del 31/10/2016, negando los términos de aquella y denunciando haber presentado certificados médicos los días 17 y 26 de octubre y lo intimó a la

Relató que ese mismo día el demandado remitió CD procediendo al despido del actor ante la falta de justificación de sus inasistencias.

Destacó que, conforme el empleador había expresado en su misiva, la liquidación final y los certificados de ley se encontraban a disposición para ser retirados por el accionante en el domicilio comercial, pero relató que, al constituirse con un inspector de la Secretaría de Trabajo (en adelante, SET) estos no se encontraban, dejando constancia de ello mediante Acta nº 3343.

Agregó que posteriormente se le abonaron parcialmente el aguinaldo proporcional, vacaciones no gozadas y SAC sobre este último rubro, por lo que reclamó sus diferencias.

Efectuó planilla indemnizatoria y agregó documentación original que da cuenta el cargo de hoja 101.

Corrido traslado de la demanda, se presentó el letrado Carlos Ruiz Nuñez, en representación del demandado a hojas 116/120 (digitalizadas).

En tal carácter, contestó demanda y luego de efectuar una negativa particular y general de los hechos denunciados en la demanda, dio su versión sobre los mismos.

Afirmó que la verdad de los hechos, es que el actor hacía abandono reiterado de su trabajo, sin poner en conocimiento de su empleador.

Destacó que el actor manifestó que se encontraba imposibilitado de cumplir tareas, el día 03/10/2016 a horas 19.00 realizó denuncia policial por ante la Comisaría nº 12, manifestando que ese día, a horas 15.00, había colisionado con otro camión. Afirmó que el actor pretendió sostener un estado de imposibilidad física para prestar sus tareas sin embargo, se encontró trabajando el mismo día de vigencia del certificado médico.

Alegó que se trata de una demanda sin

cargos de hoja 121.

Se abrió la causa a pruebas al solo fin de su ofrecimiento (decreto de hoja 126), ofreciendo las partes aquellas que dan cuenta el informe actuarial de hoja 129.

El 22/05/2019 se llevó a cabo audiencia de conciliación prevista por el art. 69 CPL la que, se tuvo por fracasada por lo que se procedió a proveer las pruebas ofrecidas.

El 28/10/2020 se apersonó el letrado Jorge Daniel Arias en representación del actor, de acuerdo al poder *ad-litem* que agregó.

Secretaría Actuarial informó sobre las pruebas producidas por las partes el 29/03/2021.

El 04/05/2021 se denunció el fallecimiento del demandado y quienes son sus herederos, a los que se tuvo por constituidos sus domicilios en los estrados digitales ante la falta de apersonamiento en la causa (decreto del 18/08/2022)

Se agregaron los alegatos únicamente de la parte actora, mediante providencia del 12/09/2022.

Finalmente, mediante providencia del 29/09/2022 se pasaron los autos a despacho para resolver, el que notificado y firme, deja la causa en estado de ser resuelta.

ANÁLISIS DEL CASO Y FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA

Conforme los términos de la demanda y el responde, constituyen hechos admitidos y, por ende, exentos de prueba: 1. Existencia de relación laboral entre las partes. 2. Acto y fecha de despido directo, ocurrido por CD del 03/11/2016.

El demandado no realiza un desconocimiento pormenorizado de la documentación presentada por la actora. Cabe recordar aquí que el art. 88 del CPL prescribe que: *“Las partes deberán reconocer o negar categóricamente los documentos que se les atribuyen y la recepción de las cartas, telegramas y facsímiles que les hubieran dirigido. El*

Respecto al cumplimiento de la parte actora en cuanto a lo dispuesto por el art. 88 del CPL, del acta de audiencia del art. 69 del 22/05/2019, surge que el Sr. Pérez, no acudió personalmente a la misma, por lo que correspondía a la parte demandada instar a que se intime al accionante a los fines de que reconozca o niegue los documentos que se le atribuyen en un plazo de tres días, de conformidad al inciso tercero del artículo 88 del digesto procesal laboral. Atento no haber solicitado tal intimación, considero que corresponde tener por desconocida la documentación adjuntada por la demandada en su contestación.

La jurisprudencia, que comparto, tiene establecido que: *“La sentencia atacada determinó la fecha de ingreso de la actora, la categoría profesional y la jornada laboral (segunda cuestión) basándose en la correspondencia epistolar, la confesión ficta de la demandada, los dichos del testigo M. y la planilla de relevamiento de la Secretaría de Trabajo ofrecida por la actora. Conforme el Art. 88 Código Procesal Laboral (CPL), la oportunidad procesal para que la parte actora reconozca los documentos que se le atribuyen es en la audiencia de conciliación prevista en el Art. 71 del CPL y si el actor no comparece personalmente a dicha audiencia -tal el caso de la actora- dentro de los tres días de ser intimado a tales fines. En el caso particular de autos, la actora no compareció a la audiencia de conciliación, no fue intimada a reconocer los documentos atribuidos y tampoco la demandada produjo la prueba informativa pertinente a fin de demostrar la autenticidad de las copias simples adjuntadas en el responde. Así las cosas, los instrumentos acompañados por la demandada no constituyen prueba válida y por ende, el a quo no estaba obligado a su valoración, por lo que no es posible hablar de un vicio de arbitrariedad en la sentencia”* (Cámara Del Trabajo - Sala 3, “Cabrera Lidia Del Valle Vs. Kousal S.A. S/ Cobro De Pesos S/ Apelación Actuación Mero Trámite”, Nro. Expte: 906/16, Nro. Sent: 162 Fecha Sentencia: 26/09/2019).

En consecuencia, las cuestiones controvertidas y de justificación necesaria sobre las que debo pronunciarme

que considere conducente para la resolución de la causa.

Primera Cuestión

Reconocida la relación laboral entre las partes actora y demandada, resta decidir respecto de sus características.

Así, el actor denuncia que ingresó a trabajar para el demandado desde el 01/03/2002 y recién se lo registró el 21/03/2007. Afirma que se desempeñó como chofer de cargas desde el año 2005 dentro de la provincia, categorizado como "Chofer de 1º categoría" del CCT n° 40/89. Denuncia jornada de 8 horas diarias de lunes a sábado, cumpliendo horas extra por la distancia de los viajes que no le fueron abonados y que percibía un remuneración de \$1.200 mensuales.

El demandado negó los hechos denunciados por el accionante, más no dio su versión de los hechos.

Sobre el particular, el art. 60 CPL dispone que el demandado deberá reconocer o negar los hechos en los que se funda la demanda, siendo su silencio o respuestas evasivas interpretadas como reconocimiento. Además deberá proporcionar su versión de los hechos bajo apercibimiento de tenerlo por conforme con los invocados en la demanda a pesar de su negativa.

Altamira Gigena sostiene que *"toda presunción dependerá de las pruebas que las partes aporten para que tenga eficacia. No se aplica de pleno derecho, sino que debe estar bien acompañada, avalada de pruebas que la ratifiquen, o desvirtúen. La presunción provoca la inversión de la carga probatoria"* (autor citado, "Ley de Contrato de Trabajo", Editorial Astrea, Bs.As. 1981, T° I, pág. 345).

1.1 Fecha de ingreso: Del análisis de la prueba pertinente surge que a hojas 16/22 se agregaron los recibos de sueldo del actor, en los que se registra su ingreso en 21/03/2007. No obstante a hojas 246, La Gaceta acompaña copia de una noticia respecto de un hecho ocurrido el 27/05/2004, en el que se identifica al actor, Juan Marcelo Pérez, quien fue detenido conduciendo un camión Scania, dominio

Lavalle 2600, en tanto preparaba comida y le llevaba (respuesta 2º). Reconoció que el actor trabajaba para el demandado y que lo hizo desde el 2002 (respuesta 4º y 5º).

Posteriormente, a hoja 477, se presenta la Sra. Alicia Dalila González y afirmó conocer al actor por venderle ropa en su lugar de trabajo y que lo hizo desde el año 2002 (respuestas 4º y 5º).

Cabe destacar que los testigos no fueron tachados por la contraria.

Del análisis integral de la prueba, considero que la fecha registral que surge de los recibos de sueldo fue desacreditada por la prueba testimonial del actor y la informativa otorgada por La Gaceta, en tanto ubicaron al actor en su lugar de trabajo y en desempeño de sus tareas propias con anterioridad a la fecha de ingreso inscripta por el empleador.

Por otro lado, intimado en tiempo y forma a exhibir la documentación que se le requirió, el mismo dejó transcurrir el plazo otorgado sin cumplir con su carga procesal, por lo que considero que corresponde hacer efectivo el apercibimiento del art. 60 CPL en conjunto con lo dispuesto por los arts. 61 y 91 de igual digesto, y en consecuencia, tener por cierta la fecha de ingreso denunciada por el accionante en su demanda, esto es, en 01/03/2002. Así lo declaro.

1.2 Tareas y Categoría: Considero corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto por el art. 60 CPL, y en consecuencia tener por acreditado que el actor se desempeñó como “Chofer de 1º categoría” en tanto surge de los recibos de sueldo agregados por él y declarados auténticos en virtud del art. 88 CPL. Así lo declaro.

1.3 Jornada: Igual solución propongo para el tratamiento de la presente cuestión, en tanto el accionante denunció una jornada de lunes a sábado de ocho horas diarias, que si bien exceden el límite dispuesto por la convención que regula la actividad, el CCT 40/89, el demandado negó tal jornada más no dio su versión de los hechos. Por otro

dichas horas de lunes a viernes, no excediéndose la jornada diaria más allá de las ocho horas cuarenta y cinco minutos (8,45'). Si así se distribuyera, el trabajador estará exceptuado de prestar servicios los días sábados, y si los prestara, esas horas de trabajo hasta las trece (13) horas, le serán abonadas con el cien (100%) por ciento de recargo".

Por lo tanto, no habiendo denunciado por un lado el demandado una jornada distinta, y no habiendo reclamado el actor las horas extra que denuncia haber realizado para aquel, considero que este se desempeñó en jornada completa de 44 horas semanales, en conformidad con lo dispuesto por el art. 4.1.1 mencionado. Así lo declaro.

1.4 Remuneración: El accionante denunció percibir la suma de \$1200 mensuales, no obstante, de los recibos de sueldo agregados por él surge una suma distinta y muy superior a la denunciada. Cabe destacar no obstante, que no reclamó diferencias salariales. La real remuneración que debió percibir el actor corresponde a aquella vigente por cada periodo establecida por la escala salarial, teniendo en cuenta su antigüedad, categoría y jornada completa desempeñada por el Sr. Pérez. Así lo declaro.

Segunda Cuestión

Causal y justificación del despido.

Denuncia el actor que desde principios del mes de octubre del 2016, se le prescribió licencia por enfermedad inculpable, por un cuadro de apnea del sueño severo con hipersomnolencia diurna exagerada, padeciendo adormecimientos repentinos en cualquier lugar y momento, por lo que se vio impedido de prestar sus tareas por los peligros que ello implicaba. Agrega que el demandado conocía su enfermedad en tanto le hizo conocer la misma a través de los diversos certificados médicos que le presentó. Destaca que el demandado procede al despido directo del trabajador a partir de los reclamos de este por la falta de pago de sus haberes, negándose a recibir los certificados médicos de licencia que intentó entregarle. Afirma haber presentado certificados médicos de fecha 03/10,

hizo caso omiso lo que motivó que se lo despidiera con justa causa.

Ahora bien, destaco que el demandado no negó la autenticidad de la documental agregada por el trabajador, en particular, de los certificados médicos y estudios del actor, los cuales se consideraron auténticos, en virtud de lo dispuesto por el art. 88 CPL. No obstante, tal documentación fue autenticada mediante los informes del Sanatorio 9 de Julio (hojas 176/177 y 365), Dra. Marta Cisneros (hoja 197), Dr. Luis Muro (hoja 359) y por el Centro de Enfermedades del Sueño (hoja 369).

Del intercambio epistolar, agregado por el accionante, y declarado auténtico por informe del Correo Oficial de hoja 229, surge que el demandado intimó al Sr. Pérez mediante CD del 26/10/2016 a reintegrarse a su puesto de trabajo, bajo apercibimiento de considerarlo incurso en abandono de trabajo, entendiendo que debió reintegrarse de su licencia por enfermedad el día 18/10/2016 (hoja 25).

El trabajador respondió la misma rechazando sus términos, informando su tratamiento y licencia por enfermedad a través de certificados médicos del 17/10/2016 y 26/10/2016 e intimó al pago de los haberes de septiembre y regularice su situación registral.

Finalmente, mediante CD del 03/11/2016 hizo efectivo el apercibimiento de su misiva anterior y lo despidió de forma directa.

En consecuencia corresponde determinar que el acto que puso fin a la relación laboral fue la CD del 03/11/2016 del demandado, fecha está en que se considerará como efectivizado el despido directo, ante la falta de acreditación de su recepción, y como excepción al principio recepticio de las comunicaciones. Así lo declaro.

En cuanto a la justificación del despido en virtud del art. 244 LCT, corresponde en primer lugar valorar si la CD del 29/08/2018 cumple con lo dispuesto por el art. 243 de la LCT -expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato-.

La comunicación del despido no debe

ser intimada).

En relación al despido con causa establecido en el art. 244 de la LCT, el abandono de trabajo, resulta importante destacar el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires mediante sentencia de fecha 14/09/11 en los autos caratulados: “*Fernández, Carlos Alberto contra Empresa San Vicente de Transporte s/Despido*”, resolvió que: “...La figura del abandono de trabajo, como lo señala su norma regulatoria (art. 244, LCT) exige para su configuración la constitución en mora del trabajador con carácter previo a su concreción (conf. causa L. 53.579, “Pino”, sent. del 22-III-1994, entre otras). Tal como reiteradamente lo ha señalado esta Corte, dicha constitución en mora tiene por objeto evitar la ruptura unilateral de la relación laboral por el mero hecho de que el trabajador no concorra a realizar sus labores cuando pudieran existir motivos impositivos con justa causa (conf. L. 37.003, “López Pereira”, sent. del 24-II-1987; L. 43.139, “Córdoba”, sent. del 19-VI-1990; L. 88.056, “González”, sent. del 12-IV-2006, entre otras)...”

Aclara dicho fallo que “*Cabe agregar a ello que esa intimación constituye un requisito imprescindible pero no suficiente para habilitar la cesantía por la referida causal, pues para ello es necesario, además, que quede evidenciado el propósito expreso o presunto del trabajador de no cumplir en lo sucesivo con su prestación de servicios, sin que medie justificación alguna, caracterizándose ese propósito -en principio y generalmente- por el silencio del dependiente (conf. causas L. 54.102, “Aranda”, sent. del 8-XI-1994; L. 88.056, “González”, sent. del 12-IV-2006)...”*

Así, se lo puede definir como el incumplimiento por el que el trabajador deja de prestar servicios sin justificación, y que el empleador sólo puede configurar previa intimación a retomar sus tareas habituales. En la Suprema Corte lo ha definido estableciendo que el denominado abandono de trabajo o abandono-incumplimiento que regula el art. 244 LCT se configura por la concurrencia de dos elementos: a) violación voluntaria e injustificada de los deberes de

Considero que en el caso, el requisito subjetivo para que se cumpla el abandono de trabajo no se produjo, en tanto, ante la intimación del empleador, el trabajador explicó los motivos de su ausencia (TCL del 31/10/2016) alegando encontrarse de licencia médica, según los certificados médicos que menciona y pone a su disposición expresamente.

En este caso, el trabajador no solo cumple con la carga dispuesta por el art. 209 LCT, sino que manifiesta de este modo, su voluntad de continuar la relación laboral expresada en su imposibilidad de concurrir a su puesto de trabajo, en razón de su estado de salud.

Por otro lado, el demandado no desconoció la autenticidad de los certificados médicos agregados por el trabajador como se advirtió, ni impugnó su validez.

En consecuencia, no existió en el trabajador indiferencia o desinterés ante la intimación del empleador a reintegrarse a su puesto, sino por el contrario, justificó su causal impeditiva conforme a derecho, mientras que el empleador, sin ejercer el control médico prescripto por el art. 210 LCT u otorgar al actor la posibilidad de acreditar su postura, procedió de forma apresurada a decidir el despido. En consecuencia, considero que el distracto no se encuentra debidamente justificado, debiendo el demandado responder por su conducta. Así lo declaro.

Cuarta Cuestión

Procedencia de los rubros e importes reclamados.

Pretende la parte actora el pago de la suma de \$901.296,57 por los conceptos de indemnización por antigüedad, preaviso (2 meses), SAC s/ preaviso, días trabajados de noviembre (4 días), integración mes de despido, SAC s/ integración, diferencia de vacaciones 2016 no gozadas, diferencia sobre SAC s/ vacaciones, diferencia de SAC proporcional 2º semestre 2016, multa art. 80 LCT, haberes de septiembre 2016 a agosto 2017, según art. 213 LCT, Indemnización art. 2 Ley 25323,

normado por los Arts. 232 y 245 LCT. Así lo declaro.

-Días trabajados de noviembre, Integración mes de despido y SAC s/ Integración: Corresponde hacer lugar al rubro pretendido por tres días del mes de noviembre, en tanto el despido directo ocurrió el día 03/11/2016, según lo declarado en la segunda cuestión. También le corresponde los rubros de integración y su complementario ya que no coincide el distracto con el último día hábil del mes, conforme lo dispuesto por el art. 233 LCT, por lo que procede por los 26 días restantes.

El sueldo anual complementario es parte integrante de la remuneración obligatoria debida a quien trabaja en relación de dependencia como accesorio necesario, con la particularidad de que su pago está diferido en el tiempo (art. 122 LCT). Así lo declaro.

-Diferencia de vacaciones 2016 no gozadas, diferencia sobre SAC s/ vacaciones, diferencia de SAC proporcional 2º semestre 2016: Atento el recibo de sueldo de hoja 17, el accionante percibió las sumas de \$9.930,96 y \$4.597,70 por los conceptos de vacaciones no gozadas y SAC proporcional al 2º semestre del 2016.

Habiendo declarado en la primera cuestión la remuneración debida al trabajador, le corresponde al demandado abonar la diferencia de dichos rubros en base a lo allí dispuesto. No le corresponde en cambio, el rubro de SAC s/ vacaciones ni sus diferencias, en tanto la indemnización por vacaciones no gozadas no es un salario, por lo tanto no genera sueldo anual complementario (conforme lo expresado también por la CNAT, Sala X, en sentencia n° 14.283, 25/04/06, "Candura, Claudio Roberto c/ Dellvder Travel SA y otro s/despidos"; CNATrab., Sala IX, 9/11/98, "Miguelés...", DT 1999-A-852). Así lo declaro.

-Haberes de septiembre 2016 a agosto 2017, según art. 213 LCT: El artículo mencionado establece que: *"Si el empleador despidiese al trabajador durante el plazo de las interrupciones pagas por accidente o enfermedad inculpable, deberá abonar, además de la indemnizaciones por despido injustificado, los salarios correspondientes a*

por lo que considero que corresponde hacer lugar a los haberes adeudados, ello ante la reticencia probada en forma documentada de la flagrante conducta asumida por la ex empleadora, violatoria de los principios establecidos en los arts. 62, 63, 10 y cc. de la LCT ante los legítimos requerimientos e intimaciones que formulara el accionante por el reconocimiento de su enfermedad y licencias otorgadas. Así lo declaro.

-Art. 80 LCT: Le corresponde el rubro, atento a que el actor intimó la entrega de la Certificación de Servicios y Remuneraciones, Certificado de Trabajo y Constancia de Aportes Previsionales dentro del plazo de 30 días previsto en el art. 3 del Decreto 146/01, mediante TCL del 01/06/2017, sin que el empleador hubiera cumplido con su entrega. Por consiguiente, se admite el rubro. Así lo declaro.

-Art. 2 Ley 25323: El actor tiene derecho a percibir este rubro, porque intimó el pago de las indemnizaciones previstas en los Arts. 232, 233 y 245 de la Ley 20744, por telegrama del 08/11/2016 (hoja 29), a lo cual la accionada no dio cumplimiento, obligándolo a iniciar la presente acción judicial. Por lo que el rubro debe prosperar. Así lo declaro.

-Arts. 9 y 15 Ley 24013: Le corresponden las indemnizaciones reclamadas en tanto, como se declaró en la primera cuestión, el actor se encontraba defectuosamente registrado en cuanto a su fecha de ingreso y cumplió con los requisitos establecidos en el art. 11 de igual digesto.

Asimismo, le corresponde la indemnización del art. 15 en tanto se acreditó el distracto dentro del periodo establecido en la norma e intimó a la correcta registración durante la vigencia de la relación laboral. Por lo tanto se rechazan los rubros pretendidos. Así lo declaro.

Intereses: Atento a la doctrina fijada por la SCJT, en autos “Olivares, Roberto Domingo vs. Michavila, Carlos Arnaldo s/ Daños y Perjuicios”, sentencia N° 937/2014, del 23/09/2014, en la que se establece que el procedimiento para el cálculo de los intereses constituye una cuestión propia de la prudente valoración de los jueces, dejando sin

Ello por entender que dicha tasa es la que corresponde a las circunstancias socio económico actual, tal como lo han entendido numerosos tribunales en todo el país. Así, por caso, las Cámaras Nacionales del Trabajo, mediante acta N° 2357/2002, del 7 de mayo de 2002, en la que se dispuso su vigencia a partir del 6 de enero de 2002, y el plenario “Samudio de Martínez c/ Transportes 260 SA s/ daños y perjuicios”, del 20/04/2009, de las Cámaras Nacionales de Apelaciones en lo Civil.

En efecto, y tal como lo expresó la Suprema Corte de Justicia de Mendoza: *“Una tasa -como la pasiva-, que se encuentra por debajo de los índices inflacionarios, no sólo no repara al acreedor sino que beneficia al deudor que dilata el pago de la deuda. Es por ello, que la tasa de interés debe cumplir, además, una función moralizadora evitando que el deudor se vea premiado o compensado con una tasa mínima, porque implica un premio indebido a una conducta socialmente reprochable. Al tratarse de deudas reclamadas judicialmente debe existir un plus por mínimo que sea que desaliente el aumento de la litigiosidad”* (“Amaya, Osvaldo D. c/Boglioli, Mario” del 12/9/05; LL Gran Cuyo, 2005 -octubre-, 911-TySS2005, 747-IMP2005-B, 2809”).

La tasa pasiva del BCRA no cumple con los fines y propósitos resarcitorios de los intereses ya que no representa fielmente el incremento de las remuneraciones, determinando, como consecuencia, que el acreedor laboral (que es un sujeto de preferente tutela constitucional -art. 14 bis CN- y en los tratados sobre derechos humanos -art. 75.22 CN-) vea menguado su crédito, con claro conculcamiento de las garantías de igualdad ante la ley (art. 16 CN); de propiedad (art. 17 CN) y de indemnidad (art. 19). Por otra parte, el “quantum” de la tasa pasiva, que se venía aplicando hasta ahora en los tribunales locales, no sólo no logra realizar la justicia del caso sino que, como resultado, premia el incumplimiento como conducta social (Drucaroff Aguiar, Alejandro, “La modificación del plenario Uzal. Una cuestión esencial no resuelta”, La Ley, 4/9/03).

Por ello, se dispone aplicar al caso la tasa de interés precedentemente referenciada. Así lo considero.

Planilla de Rubros e Intereses

Ingreso 01/03/2002
Egreso 03/11/2016
Antigüedad 14 años, 8 meses y 2 días

CCT: 40/89
Categoría: Chofer 1ra Categoría

Remuneración al distracto - Julio 2015

Básico		\$ 12.079,03
Antigüedad	1% x año	\$ 1.691,06
Total		\$ 13.770,09

<u>1) Indemnización por antigüedad</u>	
\$ 13.770,09 x 15 años	\$ 206.551,41
<u>2) Indemnización Sustitutiva de Preaviso</u>	
\$ 13.770,09 x 2 meses	\$ 27.540,19
<u>3) SAC s/ Preaviso</u>	
\$ 27.540,19 / 12	\$ 2.295,02
<u>4) Integración Mes de Despido</u>	
\$ 13.770,09 / 30 x 27 días	\$ 12.393,08
<u>5) SAC s/ Integración Mes de Despido</u>	
\$ 12.393,08 / 12	\$ 1.032,76
<u>6) Haberes Mes de Despido</u>	
\$ 13.770,09 / 30 x 3	\$ 1.377,01
<u>7) SAC proporcional 2do semestre 2015</u>	
\$ 13.770,09 / 360 x 123	\$ 4.704,78
menos abonado s/ recibo	\$ -4.597,70
<u>8) Vacaciones proporcionales 2016</u>	
\$ 13.770,09 / 25 x 303/360 x 28	\$ 12.980,61
menos abonado s/ recibo	\$ -9.930,96
<u>9) Art. 2 Ley 25.323</u>	
(\$206.551,41 + \$27.540,19 + \$12.393,08) x 50%	\$ 123.242,34
<u>10) Art. 9 Ley 24.013</u>	
\$ 13.770,09 x 60 períodos (desde 01/03/02 al 21/03/07) / 4	\$ 206.551,41

\$ 13.770,09 x 3	\$ 41.310,28
Tasa activa BNA desde 01/06/17 al 31/10/22	239,94% \$ 99.120,55
Total rubro 12 en \$ al 31/10/2022	\$ 140.430,84

13) Haberes adeudados septiembre 2016 a agosto 2017

Remunerac.	sep 16 a oct 16	nov 16 a feb 17	mar 17 a jun 17	jul 17 a ago 17
Básico	\$ 11.346,97	\$ 12.079,03	\$ 12.536,57	\$ 13.915,59
Antigüedad	\$ 1.588,58	\$ 1.691,06	\$ 1.880,49	\$ 2.087,34
	\$ 12.935,55	\$ 13.770,09	\$ 14.417,06	\$ 16.002,93

Período	Debió Percibir	% Tasa activa BNA al 31/10/2022	Intereses al 31/10/2022
sep-16	\$ 12.935,55	255,60%	\$ 33.063,12
oct-16	\$ 12.935,55	253,16%	\$ 32.747,49
dic-16	\$ 13.770,09	248,67%	\$ 34.241,95
ene-17	\$ 13.770,09	246,56%	\$ 33.951,40
feb-17	\$ 13.770,09	244,72%	\$ 33.698,03
mar-17	\$ 14.417,06	242,68%	\$ 34.987,16
abr-17	\$ 14.417,06	240,71%	\$ 34.703,14
may-17	\$ 14.417,06	238,67%	\$ 34.409,03
jun-17	\$ 14.417,06	236,70%	\$ 34.125,02
1er SAC 17	\$ 7.208,53	236,70%	\$ 17.062,51
jul-17	\$ 16.002,93	234,66%	\$ 37.552,30
ago-17	\$ 16.002,93	232,63%	\$ 37.227,44
Total	\$ 164.063,98		\$ 397.768,57

Total de diferencias	\$ 164.063,98
Total de intereses	\$ 397.768,57
Total rubro 13 en \$ al 31/10/2022	\$ 561.832,55

Resumen de condena

Total rubros 1 a 11 en \$ al 31/10/2022	\$ 2.938.971,76
Total rubro 12 en \$ al 31/10/2022	\$ 140.430,84
Total rubro 13 en \$ al 31/10/2022	\$ 561.832,55
Total condena al 31/10/2022	\$ 3.641.235,14

Costas: Atento al resultado arribado, resultando ínfimos los rubros rechazados respecto de los que sí prosperan, corresponde imponer la totalidad de las costas al demandado (cfr. Art. 64 CPCYC). Así lo declaro.

Honorarios: Corresponde en esta

Teniendo presente la base regulatoria, la calidad jurídica de la labor desarrollada por los profesionales, el éxito obtenido, el tiempo transcurrido en la solución del pleito y lo dispuesto por los artículos 14, 38, 42, 59 y concordantes de la Ley 5480 y 50 del CPL, Con los topes y demás pautas impuestas por la Ley 24432 ratificada por la Ley provincial 6715, se regulan los siguientes honorarios:

1) Al letrado Leandro Saavedra, por su actuación como apoderado del actor, en dos etapas del proceso, el equivalente del 16% de la base de regulación con más el 55% ($16\% + 55\% / 3 \times 2$), que resulta la suma de \$602.017,54 (pesos seiscientos dos mil diecisiete con 54/100).

2) Al letrado Jorge Daniel Arias, por su actuación como apoderado del actor, en una etapa del proceso, el equivalente del 16% de la base de regulación con más el 55% ($16\% + 55\% / 3$), que resulta la suma de \$301.008,77 (pesos trescientos un mil ocho con 77/100).

3) Al letrado Carlos Ruiz Nuñez, por su actuación como apoderado de la demandada, en dos etapas del proceso el equivalente del 8% de la base regulatoria con más el 55% ($8\% + 55\% / 3 \times 2$), que resulta la suma de \$301.008,77 (pesos trescientos un mil ocho con 77/100).

Por ello,

RESUELVO

I- HACER LUGAR a la demanda promovida por Juan Marcelo López, DNI N° 26.454.172, mayor de edad, con domicilio en B° Lomas de Tafí, sector 8, Mzna 1, Lote 02, casa 17 de la localidad de Tafí Viejo en contra de Esteban Fernando D'Andrea, DNI n° 7.653.937 (fallecido), con domicilio en calle Pellegrini n° 863 de esta ciudad.

En consecuencia, **se condena** a los herederos del Sr. Esteban Fernando D'Andrea, DNI n° 7.653.937, al pago de la suma de **\$3.641.235,14 (pesos tres millones seiscientos cuarenta y un**

mérito a lo considerado.

II- COSTAS: conforme a lo considerado.

III- HONORARIOS: 1) Al letrado **Leandro Saavedra**, la suma de \$602.017,54 (pesos seiscientos dos mil diecisiete con 54/100). 2) Al letrado **Jorge Daniel Arias**, la suma de \$301.008,77 (pesos trescientos un mil ocho con 77/100). 3) Al letrado **Carlos Ruiz Nuñez**, la suma de \$301.008,77 (pesos trescientos un mil ocho con 77/100).

IV- PLANILLA FISCAL : oportunamente practicar y hacer reponer (Art. 13 Ley 6204).

V- COMUNICAR a la Caja Previsional de Abogados y Procuradores de Tucumán.

REGISTRAR, ARCHIVAR Y HACER SABER 1775/17.KGE

FIRMADO DIGITALMENTE

Certificado Digital:

CN=KUTTER Guillermo Ernesto, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20218946829, Fecha:22/11/2022;
La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumán <https://www.justucuman.gov.ar>